

**S.J.: 255/2022****Ref. Contratación: 160/2022**

Se ha recibido en este Servicio Jurídico expediente de modificación del contrato de “**SERVICIO DE FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL**”, adjudicado a doña Lila Nora Parrondo Creste.

A la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, se emite el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero- Mediante la Orden 971/2020, de 13 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (actualmente de Familia, Juventud y Política Social), se adjudicó a la contratista anteriormente identificada el del contrato de servicios de se de formación de solicitantes de adopción internacional y nacional” (en adelante, el contrato).

Segundo- El contrato administrativo correspondiente fue suscrito por la adjudicataria y por el órgano de contratación el 17 de agosto de 2020. Su duración inicial quedó prevista para el periodo que mediaba entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **120380773014782856046**

Tercero- La Orden 1892/2021, de 18 de noviembre, acordó la prórroga del contrato entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Cuarto- Por el centro gestor se propone la modificación del contrato en orden a incrementar 48 horas de formación a los solicitantes de adopción, para poder prestar tres cursos más que den cobertura a la demanda actualmente existente.

Cuarto- Consta en el expediente haberse otorgado audiencia al contratista.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera- El párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), remite a la normativa vigente en el momento de adjudicación del contrato con vistas a la determinación del régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

Atendida la fecha de adjudicación del contrato del que trae causa la modificación objeto de informe, la normativa sustantiva aplicable viene constituida por la propia LCSP. Asimismo, y en cuanto no se oponga a lo establecido en dicho texto legal, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril.

En concreto, y conforme a nuestra tradición legislativa, la LCSP contempla en su artículo 190 entre las prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa, la posibilidad de modificar los contratos por razones de interés público.



Más en detalle, desarrolla el artículo 203 los aspectos esenciales de la potestad de modificación, viniendo a diferenciar entre las causas de modificación contempladas, con indicación de los concretos supuestos en que sea posible, en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), y las recogidas, en términos muy restrictivos, en la propia ley. Así, señala su apartado 2 que la modificación del contrato será posible:

“a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205”.

En el caso sometido a informe, el PCAP recogió en la cláusula 1.21 la posible modificación del contrato cuando se diera la siguiente circunstancia:

“Cuando se constate, con datos numéricos ciertos, en posesión directa de la Dirección General, que la demanda excede lo previsto en el contrato actual como número máximo de cursos y cursillos, en un 5% en todos o alguno de ellos, como mínimo, durante tres meses. En ese caso, podrá modificarse al alza, el número de cursos y/o cursillos en los que se hubiera comprobado dicho exceso en un 20% como máximo, respecto al número de los contratados inicialmente; si, por el contrario, se pusiese de manifiesto una disminución en la demanda, conocida con iguales criterios, podrá disminuirse el número de cursos y/o cursillos como máximo, en un 20% de los contratados inicialmente”.

Y, a continuación, añadía en lo relativo al alcance de las modificaciones:

“Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: El 20% del precio del contrato podrá incrementarse o disminuirse, como consecuencia de la tramitación de modificaciones del contrato”.

Asimismo, desde la perspectiva procedimental, se remite en esencia a lo señalado en el artículo 203 de la LSCP.



Las circunstancias que hacen necesaria la modificación aparecen referidas en la memoria de la modificación, suscrita por el Director General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, a titular de la Secretaria General Técnica en fecha 30 de mayo de 2022. En ella se explica que “en la ejecución del contrato la tramitación de 58 expedientes en los primeros cuatro meses del año 2022 ha supuesto un incremento del 12 % acumulativo respecto del contrato inicial total del 28,13 %, muy superior a la demanda del 5 % requerida”.

En cuanto al porcentaje máximo de la adjudicación, el PCAP que rige la relación contractual exige que el cálculo de las modificaciones se realice multiplicando el precio de adjudicación (precio/hora) por el número de horas del curso o cursillo que se aumente o disminuya. Según la memoria, la modificación se situaría en el tope máximo del 20%.

Segunda.- Desde el punto de vista procedimental, aspecto en que la disposición transitoria primera de la LCSP no deja duda sobre su aplicación al supuesto analizado, se ha seguido la tramitación prevista con carácter general para el ejercicio de las prerrogativas en materia de contratación en su artículo 191 así como las especialidades contempladas en su artículo 207, habiéndose cumplimentado en particular el trámite de audiencia a la contratista adjudicataria, que no ha manifestado oposición dentro del plazo conferido al efecto. En cambio, no es necesario el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid al no cumplirse los presupuestos necesarios para ello de conformidad con el apartado 3.b) del precitado artículo 191.

En cualquier caso, deberá atenderse a lo preceptuado en el artículo 203.3, en relación con los artículos 207 a 63, en lo concerniente a la formalización y publicidad de la modificación.



Por lo expuesto procede formular la siguiente

CONCLUSIÓN

Examinado el expediente de modificación del contrato de “SERVICIO DE FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL”, se emite informe favorable a la modificación propuesta por el órgano de contratación.

EL LETRADO-JEFE EN LA CFJPS

Fdo.: Tomás Navalpotro Ballesteros

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL.

